

plaza pública para la edición del 24 de marzo de 1992

- No al activismo
- Martínez y Ponce

miguel ángel granados chapa

A diferencia de lo dispuesto por la legislación interna priísta, las candidaturas para gobernar estados están siendo resueltas conforme al criterio de unidad, vulgo *dedazo*, y no mediante la consulta a la base. El consejo político nacional facultó al comité nacional priísta a adoptar el mecanismo que estimara conveniente para realizar esas delicadas operaciones, y ése órgano asumió esa modalidad. Les guste o no la decisión, los priístas no la han impugnado, y menos pueden llamarse a engaño, porque la posición es explícita.

Sin tomar lección de lo ocurrido a Ignacio Vázquez Torres, ~~en Oaxaca~~, quien durante años ha venido haciendo proselitismo en Guanajuato, en pos de una candidatura que le ha sido huidiza, el ex senador Luis Martínez Fernández del Campo emprendió una campaña de activismo, extraña a los cañones, que le resultó infructuosa.

A partir de diciembre de 1991, muy poco después de haber concluido su tarea senatorial, Martínez Fernández del Campo se desplazó a Oaxaca, habló con el gobernador y le anunció su propósito de visitar la entidad y encontrarse con grupos políticos, con vistas a la sucesión. Parecía un camino innecesario en un político que, conforme a las reglas inmutables del sistema, había tenido que persuadir a sus jefes y amigos, y no a los militantes del partido, para que le ofrecieran oportunidades políticas y administrativas. Llamó a sí mismo "salinista histórico", su vinculación con el Ejecutivo federal, y con Manuel Camacho, regente de la ciudad de México, le conferían dimensión suficiente para ser un precandidato fuerte. Y sin embargo, sea por un súbito arrebató democrático, sea porque quiso forzar una decisión, o porque conociendo que le era contraria, buscó revertirla, se lanzó a buscar apoyos entre los cuadros y los miembros de su partido en Oaxaca. La tentativa, que no alcanzó a sumarle simpatías de corrientes amplias y nuevas, fue interrumpida poco antes de la designación de Carrasco Palacios. Es deseable que eso no frustre la recia voluntad política de Martínez Fernández del Campo que, como suele decirse, ha perdido una batalla pero no la guerra.

El secretario de Gobernación pidió al ex senador, según informe de este mismo, suspender su proselitismo, porque era inconveniente para la vida interna del partido. No será aquí donde se haga un panegírico del verticalismo en contra de las decisiones tomadas desde abajo. Pero es claro que si se apela a los militantes, ha de ser sobre bases a que todos los interesados puedan acogerse, para que la audacia o la desaprensión no conceda ventajas a algunos. El riesgo del activismo sin regulación explícita quedó patente luego de un encuentro de Martínez Fernández del Campo con ganaderos. Estos dijeron a la prensa un par de barbaridades: 1) que habían ofrecido al ex senador unos cuantos miles de votos, los suyos propios, los de sus familiares ¡y los de sus



trabajadores! (en la mejor tradición feudal porfiriana); y 2) que eso ocurriría sólo si su interlocutor, y no otra persona, era candidato: con lo cual resultaba que, en realidad, se hacía propaganda eventualmente contraria al PRI.

Si fue verdad que don Fernando Gutiérrez Barrios hizo tal llamado a Martínez Fernández del Campo, le será cómodo formular uno semejante a Augusto Ponce Coronado, a quien tiene muy a mano, porque es el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Desde hace meses, y tal vez para contrarrestar la desventaja que padece como precandidato al gobierno de Hidalgo, por haber hecho carrera fuera de la entidad, no cesa de convocar a grupos en afán proselitista. Naturalmente, la libertad de reunión asegura a Ponce Coronado y sus amigos plena posibilidad de trabajar en pos de una meta de mediano alcance. Pero si Luis Martínez fue llamado a capítulo, la equidad debiera ordenar una actitud semejante ante el oficial mayor de Gobernación, máxime que es ese cargo el que promueve el interés de los convocados por asistir a las reuniones que prematuramente buscan encaminar decisiones en Hidalgo.



PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

No al activismo Martínez y Ponce

A diferencia de lo dispuesto por la legislación interna priísta, las candidaturas para gobernar estados están siendo resueltas conforme al criterio de unidad, vulgo *dedazo*, y no mediante la consulta a la base. El consejo político nacional facultó al comité nacional priísta a adoptar el mecanismo que estimara conveniente para realizar esas

delicadas operaciones, y ese órgano asumió esa modalidad. Les guste o no la decisión, los priístas no la han impugnado, y menos pueden llamarse a engaño, porque la posición es explícita.

Sin tomar lección de lo ocurrido a Ignacio Vázquez Torres, quien durante años ha venido haciendo proselitismo en Guanajuato, en pos de una candidatura que le ha sido huidiza, el ex senador Luis Martínez Fernández del Campo emprendió en Oaxaca una campaña de activismo, extraña a los cánones, que le resultó infructuosa.

A partir de diciembre de 1991, muy poco después de haber concluido su tarea senatorial, Martínez Fernández del Campo se desplazó a Oaxaca, habló con el gobernador y le anunció su propósito de visitar la entidad y encontrarse con grupos políticos, con vistas a la sucesión. Parecía un camino innecesario en un po-

lítico que, conforme a las reglas inmutables del sistema, había tenido que persuadir a sus jefes y amigos, y no a los militantes del partido, para que le ofrecieran oportunidades políticas y administrativas. Llamado a sí mismo "salinista histórico", su vinculación con el Ejecutivo federal y con Manuel Camacho, regente de la ciudad de México, le conferían dimensión suficiente para ser un precandidato fuerte. Y sin embargo, sea por un súbito arrebató democrático; sea porque quiso forzar una decisión; o porque conociendo que le era contraria, buscó revertirla, se lanzó a buscar apoyos entre los cuadros y los miembros de su partido en Oaxaca. La tentativa, que no alcanzó a sumarle simpatías de corrientes amplias y nuevas, fue interrumpida poco antes de la designación de Diódoro Carrasco Altamirano. Es deseable que eso no frustre la recia voluntad política de Martínez Fernández del Campo que, como suele decirse, ha perdido una bata-

lla pero no la guerra.

El secretario de Gobernación pidió al ex senador, según informe de este mismo, suspender su proselitismo, porque era inconveniente para la vida interna del partido. No será aquí donde se haga un panegírico del verticalismo en contra de las decisiones tomadas desde abajo. Pero es claro que si se apela a los militantes, ha de ser sobre bases a que todos los interesados puedan acogerse, para que la audacia o la desaprensión no conceda ventajas a algunos. El riesgo del activismo sin regulación explícita quedó patente luego de un encuentro de Martínez Fernández del Campo con ganaderos. Estos dijeron a la prensa un par de barbaridades: 1) que habían ofrecido al ex senador unos cuantos miles de votos, los suyos propios, los de sus familiares ¡y los de sus trabajadores! (en la mejor tradición feudal porfiriana); y 2) que eso ocurriría sólo si su interlocutor, y no otra persona, era candidato: con lo cual resultaba que, en realidad, se hacía propa-

ganda eventualmente contraria al PRI.

Si fue verdad que don Fernando Gutiérrez Barrios hizo tal llamado a Martínez Fernández del Campo, le será cómodo formular uno semejante a Augusto Ponce Coronado, a quien tiene muy a mano, porque es el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Desde hace meses, y tal vez para contrarrestar la desventaja que padece como precandidato al gobierno de Hidalgo, por haber hecho carrera fuera de la entidad, no cesa de convocar a grupos en afán proselitista. Naturalmente, la libertad de reunión asegura a Ponce Coronado y sus amigos plena posibilidad de trabajar en pos de una meta de mediano alcance. Pero si Luis Martínez fue llamado a capítulo, la equidad debiera ordenar una actitud semejante ante el oficial mayor de Gobernación, máxime que es ese cargo el que promueve el interés de los convocados por asistir a las reuniones que prematuramente buscan encaminar decisiones en Hidalgo.